

Nota sobre el estado actual de las luchas de los sectores asalariados

JULIO LABASTIDA M. DEL CAMPO

En los últimos 4 años se ha incrementado la movilización de los sectores asalariados. En relación a este hecho es importante destacar que tanto las huelgas como los intentos de organización independiente, provienen no sólo de grupos obreros con una larga tradición de lucha como los ferrocarrileros, los electricistas y los petroleros, sino también de núcleos de formación más reciente vinculados a las industrias modernas: como la automotriz, la siderúrgica, etcétera, e incluso de grupos obreros tradicionalmente marginados de las luchas sindicales: los trabajadores de la construcción. Más aún, es importante que algunos sectores de las llamadas "clases medias": empleados bancarios, técnicos y profesionistas de empresas estatales (PEMEX), y profesores universitarios, hayan tomado conciencia de su condición de asalariados y prolonguen las luchas de carácter gremial que en el pasado dieron los sectores magisteriales de nivel primario y medio, empleados públicos (Telegrafistas) y el movimiento médico de 1965. De esta manera, actualmente la movilización de los sectores asalariados forma un amplio abanico que cubre desde los sectores más marginados de la clase obrera hasta sus sectores más privilegiados e incluso a profesionistas y trabajadores de cuello blanco.

Una serie de factores han favorecido el desarrollo de las luchas de los sectores asalariados: si últimamente el proceso inflacionario al deteriorar drásticamente los salarios reales ha jugado un papel de primera importancia, tanto la coyuntura política como los cambios internos que se han presentado en la clase obrera y en los sectores medios han tenido una contribución fundamental. Al respecto es importante destacar que tanto las luchas por reivindicaciones económicas como por la democratización sindical, por ejemplo las del (STERM), Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana; (MSF), Movimiento Sindical Ferrocarrilero; empleados bancarios; así como las primeras luchas en las fábricas de automóviles Volkswagen y NISSAN, etcétera, se presentaron antes de que se acelerara el proceso inflacionario. La causa por lo tanto fue una nueva coyuntura política que permitió que afloraran nuevas formas de comportamiento en los sectores a que nos referimos.

La nueva coyuntura se singulariza, muy esquemáticamente, en reajustes al interior del aparato estatal que obedecen a conflictos entre la facción reformista del grupo gobernante por un lado, y por el otro, por facciones rivales de ese mismo grupo, así como por la burguesía y el capital extranjero que están en contra de la flexibilización relativa, del sistema político y del carácter populista y moderadamente nacionalista de las reformas. Desde la perspectiva de la clase obrera y de los sectores asalariados en general, la situación descrita se traduce en un debilitamiento relativo de los mecanismos de control y en cambios en la política obrera gubernamental que amplía, dentro de límites reducidos, los márgenes para la acción combativa y la organización, margen que varía según el peso específico en la economía y la fuerza política del sector de que se trate.

Los mecanismos de control se han debilitado porque el aparato sindical oficial tiene problemas internos: por una parte la burocracia sindical tiene que hacer frente a movimientos organizados que tratan de desalojarla de la dirección particularmente entre los obreros electricistas y ferrocarrileros, por la otra se multiplican los casos en que los dirigentes que pasan por encima de los acuerdos de asambleas de base son reemplazados: como sucedió este año en las empresas CINSA-CIFUNSA, General Electric, Up-John y Lido¹. Más aún se presentan grietas en la propia cúspide del aparato sindical: fomentadas por la inestabilidad en las relaciones entre la burocracia sindical y el actual equipo gobernante, así como por el descontento de las bases, se han desatado ambiciones y diferencias tácticas entre los líderes. Estas contradicciones han salido a la luz en los conflictos de la CTM en Morelos, con el caso Gamboa Pascoe en la Federación Obrera del D. F. y en el STPRM. Además el surgimiento de núcleos de organizaciones obreras independientes que han sido más combativas y han logrado responder mejor a las reivindicaciones de sus agremiados, han contribuido a aumentar el descontento de las bases del sindicalismo oficial y ha obligado a los líderes, para no perder el control, a ser más sensibles a las demandas económicas de los trabajadores. De esta manera tanto el incremento de las exigencias económicas del sindicalismo oficial como el planteo de paliativos como la jornada de 40 horas, así como las oscilaciones de la política obrera del equipo gobernante, resultado de su temor a que se deterioren seriamente los canales para manejar el descontento de los trabajadores, se cuentan entre los principales factores que han contribuido a agudizar las contradicciones del actual régimen con los grupos empresariales. Dados los factores anteriores los sectores asalariados y la clase obrera en particular, son actores muy significativos en la coyuntura actual, y su importancia tiende a crecer conforme el proceso inflacionario se agudiza.

Al principio de su administración el nuevo equipo gobernante coqueteó con la posibilidad de renovar la vieja dirección sindical, cuya permanencia más allá de los sexenios presidenciales da un margen de autonomía frente a las sucesivas administraciones, para así fortalecer y contar con una

base de apoyo para las reformas. Parte de esa tentativa consistió en mostrar cierta tolerancia hacia movimientos de independencia sindical, por ejemplo hacia el STERM y el MSF. Sin embargo, posteriormente fue claro que no pudo prescindir de una estrecha alianza con la burocracia sindical. Varios factores pesaron en esa definición: en primer lugar la burocracia sindical demostró mantener firmemente el control del aparato y sobre todo que era una aliada codiciada por las facciones del grupo gobernante desplazadas². En segundo lugar sin una base fuerte de apoyo y teniendo conflictos en varios frentes, el nuevo gobierno procuró cerrar algunos campos de batalla o al menos establecer una tregua. Varias razones aconsejaban que uno de esos campos fuera el del sindicalismo oficial: los cambios bruscos en la dirección, en un contexto de agitación obrera expondría al gobierno a perder el control y a agudizar las contradicciones a un ritmo indeseable para la estabilidad política; en cambio un entendimiento con la burocracia sindical en torno a reivindicaciones económicas moderadas, permitiría a esta última fortalecer su control y al primero le proporcionaría una base de apoyo para negociar algunas de las reformas. Posteriormente el empeoramiento de la situación económica y particularmente el proceso inflacionario reforzaron esta alianza, al convertir la canalización del descontento de las clases asalariadas en una exigencia de primer orden.

Dado el contexto anterior se explica que, en líneas generales, la política obrera del actual gobierno oscile entre las soluciones negociadas: como en el caso de las huelgas de MAJESTIC-DINESA, NISSAN, CINSA-CIFUNSA, Cementos Tolteca, etcétera, en las que el Secretario del Trabajo e incluso el presidente tienen una función de árbitros en última instancia³, y el recurso a la represión. El rechazo a las soluciones negociadas se ha dado cuando se trata de movimientos que amenazan la alianza del equipo gobernante con la burocracia sindical, como en caso de los técnicos de PEMEX o que pueden conducir al primero a un enfrentamiento peligroso con los empresarios, como sucedió con el movimiento de los empleados bancarios y en la imposición del aislamiento del FAT, como condición para llegar a una solución negociada en la huelga de CINSA-CIFUNSA. Incluso el gobierno federal ha tolerado la represión, cuando el movimiento huelguístico afecta intereses políticos regionales poderosos como sucedió con los trabajadores de "Pescados Mexicanos, S. A." en Yucatán.

Habitados a una política obrera poco flexible y menos compleja, en la que se recurría con mayor frecuencia a la represión, algunos círculos políticos han considerado a la política del actual régimen hacia los sectores asalariados, como la principal causa del incremento de sus luchas y de los avances en su organización. Al respecto y sin descuidar el marco general en que se desarrollan las luchas de las clases asalariadas, no hay que subestimar el hecho de que los triunfos, aun en el caso de que estos sean muy relativos, los han logrado los trabajadores en condiciones muy

difíciles. Por otra parte, frecuentemente los conflictos se han prolongado durante muchos meses en los que los huelguistas han tenido que soportar situaciones económicas muy precarias o han sufrido amenazas de represión, como sucedió en la huelga de la Refinería de Tula, o incluso ésta se ha materializado como en: Lido, Up-John y General Electric, etcétera. Lo que queremos destacar es que aunque la coyuntura económica y política ha presentado elementos favorables para el surgimiento de las luchas de la clase obrera y otros sectores asalariados, éstos han dado muestras de combatividad, resistencia e imaginación táctica y organizativa, aun en los casos en que los obstáculos han sido muy fuertes.

La sobreestimación de la política obrera del actual régimen ha llevado a algunos movimientos, que pusieron mucha confianza en una solución negociada, al fracaso, olvidando que ese tipo de desenlace dependía en primer término de su propio peso dentro de una determinada correlación de fuerzas. Incluso ha sucedido que algunos líderes de los movimientos independientes han caído en los mismos juegos que la burocracia sindical, pero sin contar con una posición de fuerza semejante ni con el mismo tipo de relación con sus bases. De esta manera ponen sus mejores cartas en un "arreglo en la cúspide", y descuidan las relaciones con los sectores sociales independientes que podrían fortalecerlos. De la misma forma subestiman el esfuerzo de transformar lo que frecuentemente es una masa de trabajadores descontenta pero desestructurada y por lo tanto, muy vulnerable, en una organización disciplinada, conciente y unificada en un programa de lucha a corto y a largo plazo. Hay que destacar, sin embargo, que hay elementos muy positivos en la etapa actual de la lucha de la clase obrera y de otros sectores asalariados: aunque en forma incipiente se avanza en la integración de sindicatos independientes a nivel nacional y en el desarrollo de formas solidarias de lucha. Por otra parte se trabaja en la articulación de apoyos con otros sectores de población y con organizaciones políticas dispuestas a solidarizarse con las luchas de los asalariados, buscando de esta manera romper el aislamiento de los trabajadores. Sobre este último aspecto queda mucho por hacer: en los momentos de represión se ha comprobado la débil y muchas veces nula capacidad de respuesta de las organizaciones y sectores que simpatizan con los trabajadores en lucha. Al respecto una tendencia muy saludable dentro de la izquierda es la comprensión cada vez más amplia, si exceptuamos a algunas organizaciones, de que no se puede condicionar la ayuda a sectores sociales que luchan por su liberación de condiciones opresivas, a una subordinación a la propia dirección y al mismo programa ideológico y de lucha. La colaboración que no excluya la discusión y la crítica leal, directa y respetuosa, puede ser uno de los principales factores de educación política no sólo de la clase obrera y de los sectores asalariados sino ante todo de la dirección y de los militantes de las organizaciones de izquierda.

- 1 Aunque sólo en el caso de CINSA-CIFUNSA la situación se definió en su contra, la burocracia sindical no ha podido recuperar el control de los trabajadores de las otras empresas quienes se mantienen en lucha.
- 2 Como se mostró en el banquete de Tepeji del Río, que fue presidido por Fidel Velázquez líder de la confederación de trabajadores de México (CTM) y Manuel Sánchez Vite presidente del PRI y representante de la facción desplazada. Poco después Sánchez Vite fue reemplazado en la dirección del PRI por un miembro de la facción Reformista.
- 3 Esta función del Secretario de Trabajo ha sido revalorizada a partir de que Porfirio Muñoz Ledo se hizo cargo de ese Ministerio. En este año el Secretario del Trabajo ha intervenido directamente en los siguientes conflictos: NISSAN, Refinería de Tula, Majestic-DINESA, CINSA-CIFUNSA, Cementos Tolteca. Sobre conflictos laborales enero-julio 1974, véase: Francisco Camou "Conflictos laborales enero-julio 1974", insurgencia popular N° 1, así como el número 29 de *Punto Crítico*.